REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, nueve (09) de diciembre dos mil veintidós (2022)

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONANTE: MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA
ACCIONADOS: COLPENSIONES
RADICADO: 17001-31-03-006-2022-00252-00
SENTENCIA: No. 148

Procede el Despacho a proferir sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela formulada por la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA contra COLPENSIONES, cuyo objeto de estudio corresponde a la petición de la salvaguarda del derecho fundamental de petición.

1. ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Pretende la accionante señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA se tutele su derecho fundamental de petición, y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición elevada el día 25 de julio de 2022.

Como fundamento de la tutela, expuso la accionante que cuenta con 61 años de edad, y actualmente presenta los siguientes diagnósticos:

- CARDIOMIOPATÍA ISQUÉMICA
- DISMINUCIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL, SIN ESPECIFICACIONES
- HERNIA HIATAL CONGÉNITA
- HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
- INSUFICIENCIA VENOSA (CRÓNICA) (PERIFÉRICA)
- TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO.

Adujo que mediante dictamen No. 24432833 – 6252 del 13 de julio de 2022 la Junta Nacional de Calificación de Invalidez le otorgó un porcentaje de PCL del 54,20% con fecha de estructuración del 17 de junio de 2021. Adujo que el día 25 de julio de 2022 radicó ante COLPENSIONES solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez, sin embargo, no ha recibido respuesta pese a que ya transcurrieron más de 4 meses.

1.2. Trámite de instancia

Mediante providencia del 28 de noviembre de 2022 se admitió la acción de tutela, se dispuso la notificación de los intervinientes y se realizaron los demás ordenamientos correspondientes.

1.3. Intervenciones

-COLPENSIONES dio respuesta a la tutela por medio de la Dirección de Acciones Constitucionales, en el sentido que verificado su sistema de información, se corroboró que mediante la Resolución SUB329880 del 30 de noviembre de 2022, se resolvió de fondo la petición de la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA -negando la prestación solicitada-, y a ésta le fue remitido dicho acto a la dirección electrónica misnotificacionesa1217@gmail.com.

Por lo anterior, solicita negar la tutela por evidenciarse un hecho superado.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Debate jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho determinar si por parte de COLPENSIONES se ha vulnerado el derecho de petición de la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA, esto es, si transcurrió el término previsto en la Ley 1755 de 2015 sin que hubiese recibido una respuesta de fondo a su solicitud de reconocimiento pensional.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, es un mecanismo subsidiario y residual instituido para la defensa de los Derechos Fundamentales de las personas cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas y excepcionalmente por los particulares autorizados por la ley, procedencia que además se encuentra reglamentada conforme a lo establecido en el artículo 5 y 42 del decreto 2591 de 1991.

2.3. Aspectos procesales y antecedente normativo a aplicar en el caso concreto

2.3.1. Legitimación en la causa por activa

En lo atinente a la legitimidad e interés en la acción de tutela, el artículo 86 superior dispuso que toda persona puede reclamar ante autoridades judiciales la protección inmediata de sus derechos fundamentales, y en consonancia con ello, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que *“ La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse*

en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

En el presente asunto se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, toda vez que la acción de tutela es promovida por la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA, persona a quien presuntamente se transgredieron derechos fundamentales.

2.3.2. Legitimación en la causa por pasiva

El referido artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela puede ser ejercida contra (i) cualquier autoridad pública o (ii) excepcionalmente particulares, siempre que estos últimos estén a cargo de la prestación de un servicio público, su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o el interesado se halle en situación de subordinación o indefensión.

De ésta manera, se considera acreditada la legitimación por pasiva en el presente trámite.

2.4. Del derecho de petición.

Ha expuesto la Corte Constitucional en lo relativo al derecho de petición¹

“Derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia

El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015^[2] reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo^[3].

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas^[4].

En reciente Sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación^[5]:

“1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.

3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-077/18, M.P. ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO.

4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita.

5) El derecho de petición fue inicialmente dispuesto para las actuaciones ante las autoridades públicas, pero la Constitución de 1991 lo extendió a las organizaciones privadas y en general, a los particulares.

6) Durante la vigencia del Decreto 01 de 1984 el término para resolver las peticiones formuladas fue el señalado por el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, que señalaba un término de quince (15) días para resolver, y en los casos en que no pudiese darse la respuesta en ese lapso, entonces la autoridad pública debía explicar los motivos de la imposibilidad, señalando además el término en el que sería dada la contestación.

7) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. En sentido concurrente, el silencio administrativo es prueba de la violación del derecho de petición.

8) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea el derecho de petición no la exonera del deber de responder.

9) La presentación de una petición hace surgir en la entidad, la obligación de notificar la respuesta al interesado”.

2.5. Peticiones en materia pensional

En cuanto al término para resolver peticiones en materia pensional, la Corte Constitucional ha dispuesto²:

“Derecho de petición en materia pensional

32. La Constitución Política de 1991, en el artículo 23, reconoce el derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

La Corte ha reiterado en diversas ocasiones que este derecho fundamental es indispensable para lograr los fines del Estado contenidos en el artículo 2º de la Carta, “como lo son el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan y para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas³.

La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el derecho de petición se satisface si concurren los elementos esenciales como “(i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible⁴, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados, y (iii) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido⁵”.

(...)

“DERECHO DE PETICION EN MATERIA PENSIONAL-Términos para resolver

Conforme con las normas y la jurisprudencia constitucional se tiene que: (i) Dentro de los quince (15) días siguientes a la interposición de una solicitud pensional, la administradora debe informar al peticionario sobre el estado en el que se encuentra su trámite, las razones por las cuales ha demorado la respuesta y la fecha en la que responderá de fondo sus inquietudes; (ii) Las solicitudes pensionales deben resolverse en un término no mayor a cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de la petición; (iii) Los fondos de pensiones cuentan con seis (6) meses, a partir de la solicitud, para adoptar todas las medidas necesarias que faciliten el pago efectivo de mesadas

² Sentencia T 155-2018 M.P. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

³ Sentencias T-012 y T-419 de 1992, T-172, T-306, T-335 y T-571 de 1993, T-279 de 1994 y T-414 de 1995, entre otras.

⁴ Sentencia T-481 de 1992.

⁵ Sentencias T-259 de 2004 y T-814 de 2005, entre otras.

pensionales; (iv) La entidad debe emitir un pronunciamiento de fondo, es decir, que las solicitudes se resuelvan materialmente y, además, notificarlas al peticionario”.

2.6. Análisis del caso concreto:

Pretende la accionante señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA se tutele su derecho fundamental de petición, y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES dar respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la solicitud elevada el día 25 de julio de 2022.

Así las cosas, en el asunto estudiado, se allegaron los siguientes documentos relevantes para decidirlo:

- Petición suscrita por la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA y dirigida a COLPENSIONES por la cual se solicita reconocimiento y pago de pensión de invalidez, con guía de envío.

- Resolución Número Radicado No. 2022_10347288 expedida por COLPENSIONES, por la cual se resolvió: *“ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la solicitud interpuesta por la señora VASCO DE CARDONA MARIA NUBIOLA, ya identificada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución (...).”*

- Oficio BZ2022-17773283-3677744 fechado en diciembre 1 de 2022, dirigido a la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA procedente de COLPENSIONES, por la cual se dispone notificar el Acto Administrativo SUB 329880 del 30 de noviembre de 2022.

Ahora bien, COLPENSIONES no allegó prueba de notificación de la accionante de la Resolución por la cual se dispuso resolver su solicitud de reconocimiento de pensión de invalidez; sin embargo, la accionante remitió comunicación por la cual afirma que le fue notificado dicho acto, y frente a ello expone que el mismo no resuelve lo solicitado, pues no se le indicó si es beneficiaria o no de la prestación económica, y únicamente se hace referencia a que su proceso se encuentra en investigación por fraude, sin indicar si es que cursa una investigación en su contra, y tampoco se aportan pruebas de haber cometido algún delito.

Ante este panorama, y superado como está el término legal -4 meses- con el que contaba COLPENSIONES para dar respuesta a la solicitud en materia pensional radicada por la demandante, corresponde determinar si con la Resolución Radicado No. 2022_10347288 expedida por dicha Administradora se resolvió de fondo la petición radicada por la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA el día 25 de julio de 2022.

Se tiene así que la petición de la accionante gira en torno a obtener el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez; ahora bien, en la Resolución emitida por COLPENSIONES esta resolvió *“(...) No acceder a la solicitud (...)”*, y para ello en la parte considerativa se indicó:

“(...) Que teniendo en cuenta que a la fecha Colpensiones se encuentra adelantando Verificación Preliminar, conforme a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y en la Resolución 016 de 2020, nos permitimos informar que la solicitud presentada por usted será atendida una vez finalice la actuación antes referida.

Que acuerdo con la normatividad señalada y referente a la solicitud pensión de invalidez, presentada por la señora VASCO DE CARDONA MARÍA NUBIOLA identificada con cédula de ciudadanía No. 24.432.833, es preciso informar que, revisado el expediente pensional, la documentación presentada por la citada afiliada, se encuentra en proceso de verificación.

Por lo anterior, una vez finalizado el procedimiento de Investigación Administrativa Especial se le informará las decisiones adoptadas, y en consecuencia se resolverá de manera definitiva la solicitud por usted presentada (...).”

Con todo, a través del anterior Acto Administrativo, COLPENSIONES expone que se encuentra adelantando respecto del caso de la accionante una verificación preliminar, razón por la cual, expone, posterga el pronunciamiento sobre la solicitud de reconocimiento y pago de pensión hasta que culmine la Investigación Administrativa Especial.

Ahora bien, la Administradora de Pensiones justifica su decisión en la facultad que le otorga el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011, el cual dispone:

“ARTÍCULO 243. PROTECCIÓN CONTRA PRÁCTICAS CORRUPTAS EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSIONES. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular.

Con el objeto de apoyar la gestión de las entidades territoriales en estos procesos de depuración del pasivo pensional, se podrán financiar con los recursos del FONPET y dentro de los límites previstos en el artículo 23 de esta ley, mecanismo de identificación de los pasivos pensionales irregulares de las entidades territoriales en el marco del Programa de Historias Laborales y Pasivos Pensionales, con el fin de que dichas entidades puedan proceder a realizar las acciones que correspondan incluyendo aquellas de que trata la Ley 797 de 2003, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional”.

Nótese que si bien en dicha disposición se concede la facultad de iniciar actuaciones administrativas de oficio en los casos de sospecha de fraude en trámites de reconocimiento de pensiones, dicha situación no es óbice para suspender o postergar el pronunciamiento frente a las solicitudes pensionales, puesto que, claramente manda que si como resultado de la actuación se verifica la irregularidad parcial o total del reconocimiento, la consecuencia será procederá a revocar o modificar el acto.

De lo anterior se colige que COLPENSIONES no ha dado respuesta de fondo a la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de invalidez impetrada por la accionante MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA, vulnerando en consecuencia su derecho fundamental de petición y seguridad social. Como consecuencia de lo anterior, se tutelarán dichas prerrogativas fundamentales, y en consecuencia se ordenará a COLPENSIONES que dentro del término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, dé respuesta de fondo, clara y congruente, a la petición de reconocimiento y pago de pensión de invalidez radicada por la accionante el día 25 de julio de 2022, en los términos dispuestos en la parte motiva, esto es, reconociendo o no el derecho pensional solicitado, según sea el caso, con la debida motivación.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

FALLA

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de petición y seguridad social de la señora MARIA NUBIOLA VASCO DE CARDONA identificada con c.c. 24.432.833 vulnerado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES que dentro del término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, dé respuesta de fondo, clara y congruente, a la petición de reconocimiento y pago de pensión de invalidez radicada por la accionante el día 25 de julio de 2022, en los términos dispuestos en la parte motiva, esto es, reconociendo o no el derecho pensional solicitado, según sea el caso, con la debida motivación

TERCERO: PREVENIR a la entidad accionada para que, en lo sucesivo, garanticen de forma inmediata los derechos fundamentales sin que sea necesario, un requerimiento judicial en sede tutelar. (Art. 52 Decreto 2591 de 1991).

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

QUINTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO

JUEZ

Firmado Por:
Guillermo Zuluaga Giraldo
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 006
Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **aec66f6c292928e11f9711a50d0d2fcaf2a009334fb1c765861da78f1fe0a9d8**

Documento generado en 09/12/2022 04:39:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>